

Sendero Luminoso es un movimiento focalizado en las zonas de narcotráfico

Víctor Belleza

En estas últimas semanas, el tema del posible rebrote de SL en el valle de los ríos Apurímac y Ene ha capturado la opinión pública. Los hechos ocurridos en esta zona, ubicada entre los departamentos de Ayacucho, Junín y Cusco, parecieran ir en dicha dirección. Sin embargo, tendríamos que analizar con cierto detenimiento si se trata de un rebrote subversivo o sólo de una intensificación de la actividad terrorista.

Las acciones subversivas en el Apurímac

Sendero Luminoso siempre ha estado latente en el valle. Después de la captura de Guzmán, las acciones subversivas se limitaban a los períodos electorales, pero en los últimos tres años la presencia de SL en las zonas denominadas de "frontera" se ha incrementado, intensificándose en lo que va del presente año.

Desde inicios del año SL ha ingresado en 18 comunidades del Valle del Apurímac en los distritos de Llochegua (ocho comunidades), Sivia (seis comunidades) y Pichari (cuatro comunidades nativas). Las acciones senderistas se han caracterizado por ser "pacíficas". Su discurso de "defensa de los derechos del pueblo" lo ha centrado en la "defensa de la hoja de la coca". En sus incursiones, SL hace un llamado a la Defensa Civil a no enfrentarse con ellos, recogen sus municiones, compran alimentos y ropas (en ocasiones pagan con dólares), señalan focalizar su lucha contra los militares y la Policía, mas no así contra la población, y en un par de ocasiones han jugado un partido de fútbol con la comunidad y ajedrez con los niños.

Las acciones de resonancia en el valle son pocas. En la comunidad nativa Shiruntuari, Pichari, el 9 de marzo, día de la incursión, los asháninkas capturan a dos subversivos y los entregan a la Base Militar Pichari. En la comunidad nativa de Catón-Anexo Shiato, SL quema el local de una Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios el 20 de enero. En Tutubarú, Sivia, SL toma la comunidad el día 29 de mayo por un período de tres horas, detiene vehículos, hace pintas alusivas a las elecciones y declara paro armado para los días 2, 3 y 4 de junio. En Sol Naciente, Llochegua, el 6 de junio víctima a un miembro de la comunidad implicado en el asalto y robo a un grupo de personas vinculadas al narcotráfico.

De las 18 incursiones, la mayor parte ha ocurrido en Llochegua (ocho), seguida de Sivia (seis) y finalmente Pichari (cuatro). El mayor número de incursiones ocurre en mayo entre los distritos de Sivia (dos) y Llochegua (ocho). Sin embargo, las incursiones que tienen más repercusiones son las producidas en Sivia, en las comunidades de Tutumbaru y Matucana Baja, por tratarse de comunidades con más de 500 habitantes cada una y estar ubicadas en plena carretera de acceso al Valle del Apurímac y al distrito de Sivia respectivamente.

SL es un movimiento focalizado en las zonas de narcotráfico. Su columna en el valle varía de 150 a 200 miembros, de los cuales 30% está conformado por niños y niñas, mayormente de origen asháninka; y otro 50% lo conforman jóvenes militantes, poco ideologizados, entre los 18 y 25 años, muchos de ellos captados o forzados a participar de las acciones subversivas cuando eran aún menores de edad. Sólo 20% de la columna está conformada por militantes senderistas, quienes ejercen el control sobre el resto de la columna. Según referencias locales, SL estaría compuesto por no más de 500 miembros en todo el Valle del Apurímac y Ene, con las características indicadas.

La intensificación de las acciones subversivas no debe tomarse necesariamente como un rebrote. SL no ha evolucionado políticamente, estratégicamente se ha dedicado a realizar trabajo "político", pasando en su discurso de la "defensa de los derechos del pueblo" a la "defensa de la hoja de la coca"; ni militarmente: sus problemas para captar nuevos adherentes queda demostrada por el alto porcentaje de niños y niñas en su columna, posiblemente criados en el seno de SL.

Violencia y narcotráfico: Un escenario complicado

El tema de la violencia en el valle está relacionado, además, con el del narcotráfico. Para la población del valle el principal problema no es la presencia de SL, sino la anunciada erradicación de los cultivos de coca por el gobierno, los cuales constituyen su principal medio de supervivencia. Mientras SL se ofrece voluntariamente a defender la hoja de la coca, el gobierno da voces de querer erradicarla. Este escenario se complica porque en un contexto de prolongada recesión y escasez de empleo se escuchan voces que señalan disposición de defender la coca, de ser posible, hasta con la vida.

Los productores cocaleros, aun cuando puedan "coincidir en intereses" con lo pregonado por SL, buscan diferenciarse de ellos al explorar vías democráticas como la negociación con el gobierno para una autoerradicación gradual. Por otro lado, en sectores jóvenes, que son empleados directa o indirectamente por las actividades vinculadas a la coca, se nota una percepción diferente de los discursos senderistas de "defender la hoja de la coca". Para muchos jóvenes esto puede ser entendido como la defensa de sus oportunidades de lograr algún ingreso o posibilidad en la vida, aun cuando ello sea ilegal.

¿Es posible una salida militar?

En una coyuntura de consolidación de la pacificación y reconstrucción democrática, es difícil pensar en salidas militares al problema de los remanentes subversivos. La vuelta a los estados de emergencia en el valle es planteada por algunos líderes antiguos de la Defensa Civil; sin embargo, los miembros de las bases la rechazan. Las bases de la Defensa Civil aceptan la instalación de bases militares en las denominadas "zonas de frontera", mas no estarían dispuestas a volver a los estados de emergencia porque esto significaría un recorte de sus derechos y de sus libertades.

Además, una salida militar mediante la declaratoria de emergencia en todo el valle podría complicar dos escenarios importantes, como el trabajo de la Comisión de la Verdad y la erradicación de la coca. Los aparentes desacuerdos respecto a la objetividad del trabajo de la Comisión de la Verdad por parte de algunos líderes de la Defensa Civil estarían relacionados con posibles involucramientos en temas de violaciones flagrantes de los derechos humanos. Los rechazos a la erradicación forzada y no gradual generan actitudes que van hasta asumir la resistencia armada, de ser necesario. Un escenario de estado de emergencia en el valle puede crear condiciones para que la erradicación vaya acompañada de violaciones de los derechos humanos, así como de una "eventual ayuda subversiva" en la defensa de la hoja de la coca, situación que podría complicar más aún al valle.

La alternativa política

Si bien la salida militar al problema subversivo es complicada, más complicada puede parecer una salida política. Hemos señalado que para la población del VRAE el principal problema no es SL, sino la erradicación de la coca. Por ello, una salida política al problema de la actividad creciente de la subversión en el valle tiene que incorporar el tema de la erradicación de la coca. La negociación del gobierno con los productores cocaleros del valle para una autoerradicación gradual, acompañada de programas de compensación social e inversión económica y productiva, sería la mejor salida a este tema. Abrir espacios a las soluciones negociadas y democráticas, antes que las

violentas e ilegales, resulta necesario para recuperar la confianza de los productores cocaleros y contribuir con la pacificación y el fortalecimiento de la democracia en el valle.

Por otro lado, una salida política debería considerar la situación actual de la subversión. Se debería re-entender a este "nuevo SL" para aplicar medidas que no sean las mismas que se aplicaron en las décadas de los ochenta y noventa. En tal sentido, sugiero una propuesta política con los siguientes componentes: (1) Suspender los programas de erradicación forzada de la coca planeados para el valle; (2) Que la Mesa de Diálogo con los Productores de la Zona de Influencia de la Coca pueda recoger de manera directa la particularidad del Valle del Río Apurímac y Ene, toda vez que es el único valle cocalero organizado en Defensa Civil y con tenencia de armas; (3) Mantener la presencia de bases militares en las denominadas "zonas de frontera" con la finalidad de proteger a la población y mantener la seguridad de las comunidades en dichos sectores; (4) Declarar un llamado a la deposición de las armas a las bases senderistas a nivel nacional; (5) Promover la entrega de los militantes de SL, asegurando juicios justos; (6) Diseñar un programa de rehabilitación para los niños y las niñas involucrados forzosamente en las columnas senderistas; y, (7) Diseñar un programa de reinserción civil para jóvenes militantes de SL no involucrados en violaciones flagrantes de derechos humanos.

El llamado a la deposición de las armas, entrega de los militantes en acción y el diseño de programas de rehabilitación y reinserción en la vida civil puede darse en tanto dure el trabajo de la Comisión de la Verdad. La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica podrían jugar un papel importante en esta estrategia de transitar por la vía legal y democrática hacia la consolidación de la paz y la reconciliación en el país. Igualmente, la misma Comisión de la Verdad podría jugar un papel decisivo en esta coyuntura, sin distraerse de los objetivos para los cuales fue creada. Considero necesario explorar salidas que no signifiquen más muertes ni violaciones de los derechos humanos, sino que contribuyan a la consolidación de la paz, el fortalecimiento de la democracia, la reconciliación nacional y la construcción de esperanza en un nuevo país.

Víctor Belleza es ingeniero agrónomo, coordinador de la oficina Visión Mundial de Ayacucho.